

DAMIANO  
CANALE

EN BUSCA DE LO IMPLÍCITO  
ENSAYOS SOBRE RAZONAMIENTO E  
INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO

DIEGO MORENO CRUZ  
EDITOR

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Canale, Damiano, 1968-

*En busca de lo implícito : ensayos sobre razonamiento e interpretación del derecho* / Damiano Canale ; editor Diego Moreno Cruz ; traducción Pedro Caballero Elbersci [y otros tres]. – Bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2019.

509 páginas ; 24 cm. (Intermedia de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho ; 25)

Incluye referencias bibliográficas al finalizar cada capítulo.

ISBN: 9789587902600

1. Filosofía del derecho 2. Razonamiento jurídico 3. Teoría del derecho 4. Argumentación jurídica 5. Interpretación del derecho I. Moreno Cruz, Diego José, editor II. Caballero Elbersci, Pedro, traductor III. Universidad Externado de Colombia IV. Título I. Serie.

340.1 SCDD 15

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

Noviembre de 2019

Serie orientada por Diego Moreno Cruz

ISBN 978-958-790-260-0

© 2019, DAMIANO CANALE

© 2019, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá

Tel. (57-1) 342 0288

publicaciones@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Primera edición en castellano: noviembre de 2019

Ilustración de la cubierta: *In der Wüste*, por Paul Klee

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: José Ignacio Curcio Penen

Composición: Marco Robayo

Impresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. – Xpress Kimpres

Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia

*Printed in Colombia*

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad del autor.

## CONTENIDO

Presentación	9
--------------	---

### I. RAZONAMIENTO JURÍDICO

1. El razonamiento jurídico: una introducción <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	15
2. Inferencialismo semántico y razonamiento jurídico <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	61
3. <i>Scorekeeping</i> judicial <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	105
4. La indeterminación de las normas: un enfoque inferencialista <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	127

### II. INTERPRETACIÓN JURÍDICA

5. ¿La precomprensión del interprete es arbitraria? <i>Diego dei Vecchi (trad.)</i>	165
6. La interpretación jurídica y la objetividad de los valores <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	213
7. Teorías de la interpretación jurídica y teorías del significado <i>Magdalena Ana Rosso (trad.)</i>	243

### III. META-FILOSOFÍA DEL DERECHO

8. Consecuencias del pragmatismo conceptual <i>Diego dei Vecchi (trad.)</i>	275
9. Vicios y virtudes del pragmatismo conceptual <i>Diego dei Vecchi (trad.)</i>	295
10. En busca de la naturaleza del derecho: acerca del desafío de Shapiro <i>Lucila Fernández Alle (trad.)</i>	333
11. Acción colectiva y normatividad del derecho <i>Pedro Caballero Elbersci (trad.)</i>	371

### IV. BIODERECHO Y BIOPOLÍTICA

12. El derecho público interior <i>María Angélica Moreno Cruz (trad.)</i>	407
13. La calificación jurídica de la vida humana prenatal <i>María Angélica Moreno Cruz (trad.)</i>	449
14. Muros limítrofes <i>María Angélica Moreno Cruz (trad.)</i>	479

#### 4. LA INDETERMINACIÓN DE LAS NORMAS: UN ENFOQUE INFERENCIALISTA<sup>1</sup>

Sumario: Introducción. 1. ¿Qué quiso decir el legislador? 2. La dimensión institucional de la comunicación lingüística. 3. El enfoque inferencialista: una visión de conjunto. 4. La indeterminación de las normas: un análisis inferencialista. 5. El registro de los puntos por parte del juez. 6. Observaciones finales. Bibliografía.

#### INTRODUCCIÓN

Cuando los filósofos del lenguaje y los lingüistas dirigen su atención al derecho, lo consideran, tradicionalmente, como una forma de comunicación conversacional. Esto no es, en efecto, sorprendente. Es razonable considerar que a través de la promulgación de una disposición jurídica el legislador comunica a un grupo de personas su intención de que realicen o no realicen un comportamiento determinado. La comunicación es exitosa si aquellos a quienes el legislador se dirige captan lo que intentó decir, mediante la comprensión de lo que ha dicho. Siguiendo una línea trazada por Grice, esta tesis se articula de la siguiente manera: la intención del legislador fija el contenido de la comunicación, mientras que el medio utilizado para comunicar sirve para identificar lo que el legislador intentó decir<sup>2</sup>. Este medio está constituido, por un lado, por lo que ha sido dicho –por el significado convencional codificado en las disposiciones jurídicas– y, por otro, por lo que se comunica mediante la enunciación de las disposiciones en un contexto determinado. En la mayoría de los casos, como se suele considerar, el significado convencional y el contenido contextual se combinan para transmitir la intención del legislador. De esta manera, la comunicación es exitosa: los destinatarios de las normas captan lo que el legislador intentó comunicar, mediante la comprensión de lo que la disposición expresa. Sin embargo, algunas veces el lenguaje jurídico no realiza adecuadamente su tarea: el significado convencional y el contenido contextual pueden no ser unívocos, no proveer información suficiente, o no expresar adecuadamente lo que el legislador intentó decir. Cuando esto sucede, la comunicación falla. Entre

---

<sup>1</sup> PEDRO CABALLERO ELBERSKI (trad.)

<sup>2</sup> Cfr. GRICE (1989, caps. 1, 7, 14 y 18).

las situaciones en las que esto sucede el fenómeno de la indeterminación de las normas merece particular atención. Una norma está indeterminada si su aplicación admite casos *límites* (*borderline cases*), es decir, casos en los que no está claro si la norma se aplica o no. Consideremos un ejemplo célebre propuesto por Herbert Hart (1983: 63 y ss.; 1994: 126 y ss.): ¿la disposición “Está prohibido que los vehículos circulen en el parque” expresa una norma que se aplica también a los *skateboards*? La respuesta no es simple, dado que las características que una cosa debe poseer para ser incluida en la clase designada por el término “vehículo” son múltiples y variadas, y no sabemos cuáles de ellas son necesarias y suficientes para tal propósito (Alston, 1967; Bueno y Colyvan, 2012). En consecuencia, la norma resulta indeterminada, esto es, habrá casos que caen claramente dentro de su ámbito de aplicación, casos que no caen claramente dentro de su ámbito de aplicación, y casos en los cuáles será dudoso si se la norma se aplica o no se aplica.

Ahora bien, se sabe que el fenómeno de la indeterminación de las normas puede ser explicado de diversas maneras. Es controvertido si el ejemplo hartiano recién mencionado constituye un caso de vaguedad, de ambigüedad, generalidad, generidad, dependencia contextual, de “textura abierta” del lenguaje, o de “semejanza de familia”<sup>3</sup>. En este artículo, no entraré en ese debate. Lo relevante aquí es que una norma resulta indeterminada si admite casos límite de aplicación. ¿Qué deberían hacer los jueces, en estas situaciones, para llegar a una decisión? El modelo de comunicación conversacional ofrece una respuesta clara a esta pregunta: el juez debe establecer el contenido de la disposición a la luz de lo que el legislador intentó decir<sup>4</sup>. El contenido intencional compensa la falta de determinación del significado convencional y del contenido contextual, y debe ser usado para reducir la indeterminación de las normas de manera que se pueda establecer, en nuestro ejemplo, si está o no prohibido circular con un *skateboard* en el parque.

La tesis apenas descripta, que llamaremos “modelo conversacional”, merece dos consideraciones adicionales. Desde un primer punto de vista, en la literatura filosófica es controvertido si este modelo ofrece una representación adecuada de la comunicación lingüística. Para algunos, el contenido contex-

---

3 Cfr. POSCHER (2012), MARMOR (2005: 133) y SCHAUER (2008). Sobre las diversas formas de indeterminación del lenguaje jurídico reenvío a LUZZATI (1990); sobre la dependencia contextual de las normas cfr. POGGI (2013).

4 Esta tesis ha sido sostenida, entre otros, por SOAMES (2012: 100), MARMOR (2008: 423) y NEALE (2007: 253).

tual —lo que se comunica mediante la expresión de un enunciado— depende de un conjunto de implicaturas conversacionales, generadas por el contexto, que son independientes de la intención del hablante. Por lo tanto, el hablante no tendría la “última palabra” con respecto al contenido de la comunicación, aunque su intención conservaría un rol fundamental en la comunicación<sup>5</sup>. Desde un segundo punto de vista, el modelo conversacional parece particularmente atractivo para el estudioso del derecho, porque ofrece bases filosóficas para formular una teoría normativa de la interpretación judicial coherente con los principios de legalidad, certeza del derecho y separación de poderes, que caracteriza los ordenamientos democráticos contemporáneos. Según algunos, justamente, si un juez determina el contenido de una disposición independientemente de la intención del legislador, no cumple con su deber de fidelidad al derecho, ya que de esta manera haría que su decisión sea imprevisible, e invadiría ilegítimamente el ámbito de ejercicio del poder legislativo (Allan, 2000; Goldsworthy, 2005). De todos modos, vale la pena preguntarse: ¿el modelo conversacional ofrece una explicación atendible de las características de la comunicación lingüística en el ámbito judicial? Y, si ello es así, ¿este modelo está en grado de ofrecer una respuesta convincente al problema de la indeterminación de las normas?

En la primera parte de este artículo consideraré dos de los principales defectos del modelo conversacional: el primero está relacionado con la noción de la intención del legislador (secc. 2), y el segundo con el hecho de que este modelo no tiene en cuenta la dimensión institucional del lenguaje jurídico (secc. 3). En la segunda parte del artículo presentaré una explicación de la indeterminación de las normas de inspiración inferencialista que podría ayudar a superar los defectos del modelo conversacional y, al mismo tiempo, destacar algunas características específicas de la comunicación lingüística en el contexto judicial. En primer lugar describiré los principios básicos del enfoque inferencialista para el estudio del lenguaje (sección 4); de esa manera desarrollaré un modelo explicativo original que puede ser usado para analizar el intercambio lingüístico de razones dentro de un proceso judicial. Usando este modelo explicaré cómo surge la indeterminación de las normas y cómo este problema se resuelve justamente con la aplicación de las normas (seccs. 5 y 6). A mi modo de ver, el modelo propuesto tiene dos características dignas de atención: 1) explica el contenido de un enunciado

---

5 Cfr., por ejemplo, LEVINSON (2000), SAUL (2002), SBISÀ (2007) y POGGI (2016).

exclusivamente sobre la base del comportamiento lingüístico que desarrollan quienes usan dicho enunciado en un intercambio de razones, y 2) trata la intención del legislador simplemente como una de las razones utilizadas, en los ordenamientos contemporáneos, para justificar el contenido de las disposiciones normativas. Con respecto al primer punto, el enfoque inferencialista propuesto es independiente de cualquier hipótesis mentalista o psicologista con respecto a la naturaleza de la comunicación, mientras que al mismo tiempo destaca los aspectos nomo-dinámicos que la comunicación asume en el contexto judicial. Con respecto al segundo punto, paralelamente, un enfoque inferencialista permite evidenciar por qué en los ordenamientos contemporáneos la intención del legislador no goza de la centralidad reconocida por el modelo conversacional sino que, más bien, en la mayoría de los casos es un instrumento usado para legitimar el ejercicio de poderes públicos dentro de los ordenamientos democráticos.

Sin embargo, el modelo explicativo que se propone es bastante esquemático; además, las asunciones en las que se basa no serán discutidas a profundidad. En este artículo me propongo simplemente ofrecer un análisis *fine-grained* de un fenómeno, en lugar de defender la teoría semántica y pragmática sobre la que este análisis se basa. Consciente de ello, en la última sección (7), esbozaré algunos de los problemas filosóficos que debe enfrentar una explicación inferencialista de la indeterminación de las normas.

## I. ¿QUÉ QUISO DECIR EL LEGISLADOR?

Se cree ampliamente que el derecho es un fenómeno principalmente intencional (Gardner, 2010: 420). En la mayoría de los casos las disposiciones jurídicas han sido creadas por alguien que se encontraba facultado para establecerlas, cambiarlas o derogarlas; por lo que, sería desconcertante suponer que el contenido de estas disposiciones no sea el contenido que intentó asignarle quien las creó. Como afirma Josep Raz, “no tiene sentido dar a una persona u órgano colectivo el poder para crear derecho, si no se asume que el derecho creado por esta persona u órgano sea el derecho que tenía la intención de crear” (Raz, 2009: 274). Al mismo tiempo, sin embargo, la noción de intención del legislador parece ser muy problemática. Basta aquí mencionar algunos problemas teóricos y prácticos que han sido ampliamente discutidos en la literatura.

En primer lugar, si tratamos de rastrear la intención del legislador nos enfrentaremos enseguida a un *problema ontológico*: ¿qué tipo de entidad es-

tamos buscando? Muchos juristas señalan que en los sistemas modernos, el legislador es un órgano colectivo, es decir, una entidad institucional carente de mente, a la que no parece plausible atribuir intenciones. La intención subjetiva de los miembros de este órgano, al mismo tiempo, no puede ser claramente identificada, ni parece relevante<sup>6</sup>. También se ha afirmado que quien atribuye una intención a un grupo determinado incurre en la falacia de la composición. Incluso si fuese cierto que algunos miembros de la asamblea legislativa tienen la intención de que *p* sea obligatorio, de esto no se sigue que todo el cuerpo legislativo tiene la intención de que *p* sea obligatorio<sup>7</sup>. Todo lo que sabemos es que la mayoría de la asamblea legislativa ha tenido la intención de promulgar una disposición<sup>8</sup>.

En segundo lugar, la noción que estamos considerando plantea un *problema epistémico*: incluso si asumimos que la intención del legislador pertenece al inventario de lo que existe en el mundo, ¿cómo podemos conocerla? La intención del legislador no puede ser fácilmente identificada –excepto en los casos en los que ha sido explícitamente formulada– especialmente si los textos normativos considerados son muy antiguos<sup>9</sup>. Los trabajos preparatorios y los llamados *floor debates* frecuentemente no proporcionan pruebas suficientes para este propósito, especialmente cuando los individuos y órganos institucionales involucrados en el proceso legislativo son numerosos. También se debe tener en cuenta que en algunos ordenamientos jurídicos el uso de los trabajos preparatorios está sujeto a limitaciones, porque entra en conflicto con el principio de publicidad del derecho: si el derecho debe conocerse con antelación a la conducta regulada, el uso de dichos documentos debería ser limitado, porque estos no siempre son fácilmente accesibles a los destinatarios del derecho<sup>10</sup>.

---

6 Cfr., por ejemplo, RADIN (1930: 870 y ss.), CAMPBELL (2001: 292), BOUDREAU, LUPIA, McCUBBIS y RODRÍGUEZ (2007: 972).

7 Cfr. PETTIT (2001: 250–251).

8 Los problemas recién mencionados respecto de las nociones de “intencionalidad colectiva” y “sujeto plural”, no serán considerados en este artículo. Cfr. acerca del punto, entre otros, BRATMAN (1999), GILBERT (2006), BACHARACH (2006) y TUOMELA (2013). Parece plausible sostener que una asamblea legislativa actúa como una entidad colectiva porque las asambleas son creadas por reglas constitutivas que les atribuyen el poder para promulgar disposiciones normativas.

9 Cfr., por ejemplo, MARMOR (2005, cap. 8–9) y MACPHERSON (2010: 2 y ss.).

10 Este es tradicionalmente el caso de Australia y Nueva Zelanda; cfr. GOLDSWORTHY (1997: 10–15), ALLAN (2000: 110–111), además, SUMMERS (2000: 251–283) y EKINS (2012: 274).



En tercer lugar, si asumimos que la intención del legislador existe y puede ser conocida, surge el *problema del grado de abstracción*: ¿podemos conceder que la intención del legislador sea identificada de manera abstracta o, más bien, consideramos que debería ser identificada de manera precisa?<sup>11</sup>. A veces este problema teórico se aborda en términos de niveles de generalidad: la formulación del texto jurídico objeto de interpretación podría sugerir una regulación más general o menos general con respecto a la intención del legislador. Cuando surgen problemas de este tipo, ¿cómo se determina el conjunto de casos a los que el derecho se aplica? Los criterios para tomar esta decisión son controvertidos y terminan condicionando el contenido intencional de las disposiciones normativas<sup>12</sup>.

En cuarto lugar, en los ordenamientos en los que las deliberaciones de la asamblea legislativa están *de facto* en las manos del ejecutivo, surge un *problema político*: ¿cuál es la intención relevante? ¿La intención de la asamblea legislativa o la intención del ejecutivo? (cfr., Greenawalt, 2000: 645-646). Algunos sostienen que en este caso la noción de delegación puede ser útil: las disposiciones pueden interpretarse de acuerdo con las intenciones de los delegados –grupos o individuos que actúan en nombre de mayoría– en la medida en que “las razones para interpretar la legislación en conformidad con las intenciones legislativas son también las razones para interpretar la legislación de acuerdo con la intención de los delegados, cuando son ellos los que determinan el contenido de la legislación”<sup>13</sup>. Sin embargo, esta posición pone en segundo plano el hecho de que la autoridad legislativa está en manos de la asamblea legislativa entendida como una entidad colectiva, hasta el punto de poner en tela de juicio la posibilidad de reducir la intención de esta última a la de sus delegados en virtud del perfil político-institucional (Ekins, 2012, cap. 1).

A esto se podría objetar, haciendo propias algunas de las intuiciones de Grice, que la intención del hablante puede inferirse a partir de los principios de la acción racional y de la información contextual (Sperber y

11 Cfr. STOLJAR (1998: 36-37), WILLIAMS (2001: 326-329) y GOLDSWORTHY (1997: 30-31).

12 MORESO propone la siguiente solución: si el texto es preciso, una duda interpretativa debe resolverse al mismo nivel de precisión, buscando la intención legislativa precisa; si el texto tiene una formulación abstracta (como muchas disposiciones constitucionales), una duda interpretativa debe resolverse en el nivel abstracto, dejando espacio para las consideraciones contextuales; cfr. MORESO (2005: 136), y WILLIAMS (2001: 337-338).

13 MACPHERSON (2010: 17). Reenvío aquí a la conocida distinción entre “majority’s theory” y “agency theory” de la legislación; cfr. EKINS (2012, cap. 1).

Willson, 1995; Recanati, 2002). Dicho de otro modo, las actitudes como las intenciones pueden ser adscritas a los órganos legislativos sobre la base de lo que racionalmente está presupuesto o implicado en la promulgación de una disposición en un contexto determinado. Si observamos la intención del legislador desde este punto de vista, los problemas ontológicos, epistemológicos, abstractos y políticos que acabamos de señalar pueden ser resueltos. Pero, si tomamos este camino, surge inmediatamente un problema adicional, no menos serio que los precedentes. Los tribunales utilizan innumerables esquemas inferenciales para identificar la intención del legislador a la luz de la información disponible en el *background*, y cada uno de esos esquemas permite, potencialmente, justificar resultados decisionales diversos (Greenberg, 2011: 220). Sin alguna pretensión de completitud, por “intención del legislador” los tribunales entienden:

- 1) El contenido que el legislador tuvo la intención de comunicar al momento de promulgar la disposición;
- 2) El contenido que los destinatarios de la norma consideran que el legislador tuvo la intención de comunicar al momento de la promulgación;
- 3) El contenido que el actual legislador habría tenido la intención de comunicar, si hubiese promulgado la disposición en cuestión;
- 4) El contenido que un legislador racional habría tenido la intención de comunicar;
- 5) El contenido que un legislador justo habría tenido la intención de comunicar;
- 6) El contenido que los destinatarios actuales de la norma creen que el legislador ha tenido la intención de comunicar;
- 7) El contenido que el legislador habría tenido la intención de comunicar sobre la base de otras normas que pertenecen al mismo ordenamiento jurídico;
- 8) El contenido que expresa el propósito que la disposición pretende lograr, y
- 9) El contenido que el legislador ha implicado o presupuesto, pero intencionalmente omitido, para evitar asumir responsabilidades políticas.

Este elenco evidencia que la expresión “intención del legislador” se refiere a una multiplicidad de cánones interpretativos diferentes, los cuales pueden llegar a justificar decisiones incompatibles entre sí, dependiendo de si por “legislador” se entiende la entidad colectiva que efectivamente ha promulgado la disposición, o la entidad ficticia que responde a las ex-

pectativas de los destinatarios de las normas, que garantiza la coherencia del ordenamiento, o que tiende a producir normas que realizan o protegen algunos valores determinados<sup>14</sup>. A esto se podría añadir que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos la interpretación de las disposiciones se justifica habitualmente mediante razones que no están relacionadas con la intención del legislador. Esto ocurre cuando la interpretación judicial es concebida como una actividad cuyo propósito no consiste solamente en identificar el contenido intencional de los textos normativos, sino también en proteger principios generales del derecho tales como la coherencia, la razonabilidad, el tratamiento igualitario, la fidelidad del juez al derecho, etc. Se sigue que si el contenido intencional de las disposiciones entra en conflicto con uno de estos principios, la intención del legislador ya no es una razón determinante o relevante para la justificación de la decisión. Cuando eso ocurre, los jueces no se conciben a sí mismos como servidores fieles de la legislatura, sino como servidores del derecho y de sus propósitos generales<sup>15</sup>. En ese sentido, tanto la legislación como la jurisdicción pueden ser gobernadas “por propósitos que trascienden, y en ocasiones entran en conflicto con, el ideal coloquial de un intercambio de información eficiente y cooperativo” (Soames, 2009: 421).

---

14 Cfr., CANELE y TUZET (2016). N. MACCORMICK afirma que el argumento de la intención del legislador, con base en el uso que hacen los tribunales, posee un carácter “transcategorial”: para reconstruir la intención del legislador, los tribunales hacen frecuentemente uso de otros argumentos interpretativos: sistemático, teleológico y consecuencialista. En estos casos, la referencia a la intención del legislador desempeña simplemente la función de justificar el uso de otros argumentos. Cfr., MACCORMICK (2009: 125).

15 Según ESKRIDGE, por ejemplo, “los jueces que interpretan las disposiciones [...] son como diplomáticos que actúan en función de las directivas de su propio servicio diplomático nacional. Estos diplomáticos a menudo deben aplicar directivas ambiguas o enfrentar situaciones imprevistas de una manera creativa, sin quedar limitados por las órdenes recibidas. Pero ellos son, finalmente, agentes de una empresa común y su libertad interpretativa está limitada a los encargos recibidos, que no son necesariamente consistentes o coherentes en el transcurso del tiempo o incluso en cualquier momento”: ESKRIDGE (1987: 1554). Acerca de la idea de los tribunales como “agentes fieles de la intención del legislador” cfr. también MANNING (2001: 5).

## 2. LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

El modelo conversacional parece ser defectuoso por una razón ulterior: no da cuenta de la dimensión institucional de la comunicación lingüística en el ámbito jurídico.

Se ha hecho énfasis en que los contextos jurídicos, por ejemplo el judicial, presentan diferencias relevantes con respecto a los contextos conversacionales ordinarios. En estos las disposiciones se tratan como *inputs* lingüísticos que se elaboran inferencialmente para producir *outputs* normativos que se puedan justificar dentro de un ordenamiento determinado. La elaboración inferencial del lenguaje jurídico se realiza típicamente en el contexto del juicio, dentro del cual los jueces deben aplicar normas<sup>16</sup>. ¿Cuáles son las características fundamentales de este contexto? Se sabe que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos el contexto judicial tiene una estructura tripartita y antagónica que caracteriza el proceso; incluye una parte que hace un reclamo, una parte que responde a ese reclamo, y un juez independiente que resuelve autoritativamente la controversia con base en lo que dispone el derecho. Cada una de las partes articula inferencialmente el contenido de las disposiciones, en virtud de su función institucional, para conseguir sus propios objetivos. Para ello, cada parte actúa estratégicamente: tanto el demandante como el demandado, el fiscal como la defensa, dan diversas razones para reconstruir los hechos objeto del juicio, para identificar el contenido de las disposiciones, y para calificar jurídicamente los hechos. Con base en las razones ofrecidas por las partes, el juez reconstruye los hechos del caso, identifica las disposiciones relevantes y su contenido lingüístico, resuelve eventuales antinomias y colma las lagunas, determina si las normas admiten excepciones implícitas, y finalmente establece si el caso entra o no en el ámbito de aplicación de la norma. Dicho de otra manera, con base en las razones propuestas por los otros participantes en el proceso, el juez elige cuál de las articulaciones inferenciales de los *inputs* lingüísticos relevantes es idónea para justificar la decisión del caso. Esta forma básica de intercambio de razones entre adversarios puede incorporar otros participantes en la práctica

---

<sup>16</sup> Este no es, de cualquier modo, el único contexto en el que sucede dicha elaboración. Piénsese, por ejemplo, en el trabajo realizado por la doctrina jurídica, que elabora el contenido de los textos normativos para fines no directamente decisorios. Cfr. GUASTINI (2017: 253 y ss).

lingüística (testigos, peritos), y proporcionar una base para las decisiones futuras de otros jueces, tanto en países de *common law* como de *civil law*. El modo en que las razones jurídicas son articuladas en el proceso depende de las actitudes, de los intereses, de las convenciones morales y de las elecciones políticas de los participantes en el intercambio lingüístico; factores que dan forma al contenido del derecho y condicionan la decisión del juez.

Además, es ampliamente sabido que la comunicación lingüística en el ámbito jurídico está regulada por el mismo derecho. Los ordenamientos jurídicos contienen normas que: 1) Instituyen a los sujetos autorizados para emanar, modificar o derogar las disposiciones normativas, como también para aplicar y ejecutar las normas; 2) Regulan procesalmente el ejercicio de estos poderes, estableciendo, por ejemplo, quién está autorizado a ofrecer razones en el proceso, qué razones son relevantes en una controversia y cómo un intercambio de razones se debe llevar a cabo, y 3) Definen los términos y expresiones contenidos en las disposiciones, precisan su contenido, prescriben cómo deben ser interpretadas y así sucesivamente. En resumen, el derecho regula la interacción lingüística en el contexto judicial y, en consecuencia, gobierna autoritativamente el contenido de los textos normativos.

Si todo ello es en algún sentido obvio, ¿por qué parece relevante respecto de la indeterminación de las normas? Lo que he dicho pone en evidencia que este fenómeno depende de las elecciones lexicales del legislador, del contexto de adjudicación, de los roles institucionales desempeñados por los hablantes y de las razones exhibidas durante el proceso tanto por las partes como por el juez. Al formular una disposición, los órganos de producción normativa prefieren a veces utilizar expresiones lingüísticas indeterminadas, para lograr compromisos políticos o porque así lo ha requerido la materia objeto de regulación (cfr. ENDICOTT, 2011). En el último caso, el legislador asume que los jueces están en mejor posición para especificar el contenido de las disposiciones con la finalidad de alcanzar un objetivo social o político determinado. La decisión de utilizar términos o expresiones que presumiblemente abren la puerta a casos límite tiene, típicamente, el efecto de delegar en los jueces el ejercicio de una forma de legislación intersticial: los jueces no adquieren el poder para crear derecho *ex novo*, pero se encuentran en la posición de tener que especificar el contenido de las disposiciones al momento de decidir los casos que deben resolver. Sin embargo, cabe señalar que la formulación de una disposición no es suficiente para establecer si su contenido admite o no admite casos límite. La indeterminación de las normas tiene naturaleza

contextual: el contenido N de la disposición D puede admitir casos límite en el contexto judicial  $C_1$ , y de esta manera no ser claro si el caso X está o no está regulado por N; mientras que en el contexto  $C_2$ , el contenido de D parece suficientemente preciso para establecer si X cae o no cae en el ámbito de aplicación de N. La elección lexical del legislador identifica simplemente el dominio jurídico (la materia regulada) en el que las normas encuentran aplicación, un dominio con respecto al cual la probabilidad de que casos límite puedan surgir resultará mayor o menor con base en la información de que se disponga. Esto introduce la segunda particularidad de la indeterminación de las normas en sede judicial. Como veremos enseguida, la indeterminación de las normas constituye el resultado de la interacción lingüística entre los participantes en el proceso, que a su vez depende de la competencia lingüística de los hablantes y de un conjunto de asunciones contextuales de fondo —de tipo jurídico y extrajurídico— que gobiernan la comunicación. Dicho de otra manera, la indeterminación de las normas y el resultado de la praxis social consiste en dar y pedir razones dentro de un contexto comunicativo en el que el rol de los hablantes, los poderes y prerrogativas ejercidas por estos, las razones relevantes, y las modalidades de interacción lingüística son instituidas y reguladas por el derecho. Ahora bien, el modelo conversacional no solo parece no estar en grado de dar cuenta de lo que se ha dicho, sino que corre el riesgo de ocultar las características particulares del contexto judicial. Dicho modelo pone en segundo plano los aspectos nomo-dinámicos que caracterizan a la comunicación lingüística dentro del proceso.

En las siguientes secciones delinearé una estrategia alternativa de análisis basada en un enfoque inferencialista del contenido lingüístico. Según mi modo de ver, un enfoque inferencialista merece atención con respecto al problema de la indeterminación de las normas porque no explica el contenido lingüístico desde abajo hacia arriba (*bottom-up*), es decir, primero ofreciendo una explicación del significado convencional de las expresiones jurídicas, luego del proceso contextual por el cual este contenido es enriquecido, modulado o extendido, para finalmente considerar de qué manera la intención del hablante puede resolver los problemas de la indeterminación del contenido comunicativo. El inferencialismo adopta, por el contrario, una línea de explicación que va desde arriba hacia abajo (*top-down*) (Brandom, 2000: 12-16): comienza por los actos lingüísticos realizados por aquellos que participan del intercambio lingüístico en un cierto contexto, y del rol que estos sujetos se reconocen recíprocamente, analiza cómo un intercam-



bio de razones determina el contenido lingüístico, es decir, las condiciones de aplicación de un enunciado. En este sentido, un enfoque inferencialista parece más prometedor si se intenta ofrecer una explicación convincente y analíticamente detallada del funcionamiento de la comunicación lingüística en un contexto institucional.

### 3. EL ENFOQUE INFERENCIALISTA: UNA VISIÓN DE CONJUNTO

Una explicación inferencialista del contenido lingüístico se caracteriza por poseer tres núcleos teóricos fundamentales estrictamente relacionados entre sí: a) una semántica del rol inferencial; b) una pragmática de los estados normativos de los hablantes, y c) la tesis de que los participantes “registran los puntos” (*scorekeeping*) de la práctica lingüística<sup>17</sup>. Examinemos estos núcleos más de cerca.

a) El contenido de un enunciado –así como también el contenido de cualquier otra entidad a la que comúnmente se atribuyan contenidos: creencias, deseos, intenciones– consiste en el rol inferencial que lo caracteriza. Por rol inferencial se entiende la función que el enunciado desempeña en el razonamiento: su función como antecedente o como consecuente en las relaciones entre enunciados<sup>18</sup>. El contenido que el enunciado transmite es el conjunto de esas relaciones, las cuales hacen explícitas las reglas que gobiernan el uso del lenguaje en un contexto discursivo determinado, y determinan las condiciones de aplicación de las expresiones enunciativas y sub-enunciativas, fijando al mismo tiempo su referencia. Ahora bien, según Robert Brandom las relaciones inferenciales que constituyen el contenido lingüístico son de tres tipos: *compromisos enunciativos* (CE), *autorizaciones enunciativas* (AE) y *relaciones de incompatibilidad* entre enunciaciones (IE). Las relaciones inferenciales del primero y segundo tipos pueden ser descritas como conjuntos

---

17 Cfr. BRANDOM (1994). Para una ilustración más amplia y articulada de estos tres núcleos reenvío a CANALE y Tuzet 2007.

18 Las relaciones inferenciales a las que aquí nos referimos, expresables mediante el uso de condicionales materiales, son concebidas, en la perspectiva inferencialista, no como inferencias formales, sino como inferencias materiales. De acuerdo con BRANDOM y SELLARS, la validez de una inferencia material no depende de la forma del razonamiento, sino del contenido del vocabulario no lógico usado en el razonamiento. Sobre este punto, que no es posible profundizar en esta sede, cfr. BRANDOM (2000: 52-55) y SELLARS (1953).

ordenados de antecedentes y de consecuentes de condiciones materiales. Un ejemplo son los condicionales “si estoy caminando, entonces me estoy moviendo”, “si Roma está al sur de Milán, entonces Milán está al norte de Roma”, “si Franco y Rosa han estipulado un contrato, entonces entre ellos hay un acuerdo”, y así sucesivamente. Las relaciones de incompatibilidad pueden ser, en cambio, representadas como pares ordenados de enunciaciones incompatibles. Por ejemplo, en los contextos conversacionales ordinarios, si afirmo que “estoy caminando”, esto es incompatible con “estoy inmóvil”; si afirmo que “Roma está al sur de Milán”, esto es incompatible con “Roma está al norte de Milán”; si afirmo que “Franco y Rosa han estipulado un contrato”, esto es incompatible con “entre Franco y Rosa no hay un acuerdo”. La tesis principal que la semántica del rol inferencial sostiene expresa que el contenido de un enunciado consiste en el conjunto de inferencias en las que está involucrado en el uso del lenguaje, inferencias que determinan además el contenido de términos sub-enunciativos. Se sigue, en la perspectiva que estamos considerando, que el rol inferencial del enunciado S se articula del siguiente modo: {antecedentes de S en los CE, consecuentes de S en los CE, antecedentes de S en las AE, consecuentes de S en las AE, incompatibilidades de S}. Pero, ¿cómo se determina el rol inferencial de un enunciado?

b) El rol inferencial de un enunciado depende de los estados normativos que los hablantes se atribuyen recíprocamente cuando realizan actos de habla en una práctica discursiva. La idea de Brandom es que participar en una práctica discursiva consiste en ser responsable de las afirmaciones realizadas, y que un participante es responsable de lo que afirma si es considerado como tal por los demás participantes (Brandom, 1994: 161-163). El inferencialismo califica estos estados normativos como compromisos (*commitments*) y autorizaciones (*entitlements*), términos que expresan, respectivamente, el deber de aceptar las premisas (antecedentes) y las conclusiones (consecuentes) con las que se ha asumido un compromiso, y el permiso para utilizar las premisas y derivar las conclusiones para las que se tiene autorización<sup>19</sup>. A su vez, estos estados normativos dependen de las actitudes normativas de los participantes en la práctica lingüística, las cuales no deben ser entendidas como estados mentales o disposiciones, sino más bien como tipos de

---

19 Las prácticas discursivas dan lugar a diferentes tipos de compromisos: BRANDOM distingue entre compromisos doxásticos (que corresponden a las creencias), compromisos inferenciales (que corresponden a las razones) y compromisos prácticos (que corresponden a las acciones intencionales). Cfr. BRANDOM (2000: 30-31, 69-79, 93-96).



comportamiento dentro de un juego lingüístico. Según Brandom, hay tres actitudes normativas básicas en los intercambios de razones: atribuir (*attributing*), asumir (*undertaking*) y reconocer (*acknowledging*). Cada participante atribuye (considera que el otro participante adopta), asume (adopta implícitamente) y reconoce (adopta explícitamente) compromisos y autorizaciones en el curso de una interacción lingüística. Estas distinciones arrojan algo de luz sobre la naturaleza de los roles inferenciales contemplados anteriormente. En la perspectiva que estamos considerando, la semántica depende de la pragmática, esto es, el contenido de un enunciado (rol inferencial) es una función del modo en que pragmáticamente los participantes usan un enunciado en un contexto comunicativo y, por lo tanto, de los estados normativos que pragmáticamente se atribuyen recíprocamente. Dicho de otro modo, las inferencias en las que se articulan compromisos, autorizaciones e incompatibilidades dan cuenta de los estados que los hablantes se atribuyen, se asumen y se reconocen interactuando entre sí en el contexto de un juego lingüístico. Estas inferencias tienen la siguiente forma:

*Inferencias relativas a compromisos enunciativos*: si alguien se compromete con S<sub>1</sub>, entonces se compromete con D<sub>2</sub>.

*Inferencias relativas a autorizaciones enunciativas*: si alguien está autorizado a S<sub>1</sub>, entonces está *prima facie* autorizado a S<sub>2</sub><sup>[20]</sup>.

*Inferencias de incompatibilidad*: si alguien se compromete con S<sub>1</sub>, entonces no está autorizado a S<sub>2</sub>.

Para aclarar este punto, imaginemos que Bruno está hablando por teléfono con Mario y diga “estoy caminando” (S<sub>1</sub>). Como reflejo a este acto lingüístico, Mario atribuye a su interlocutor un compromiso doxástico (con respecto a cómo es, de hecho, el mundo) tratando su enunciación como una aserción, la que compromete a Bruno a afirmar, en caso de que se le pregunte, “me estoy moviendo de un lugar a otro” (S<sub>2</sub>). Mario podrá adoptar, a su vez, esta afirmación como una premisa o conclusión implícita en su razonamiento, así como también reconocer explícitamente lo que Bruno ha afirmado, atribuyéndole una autorización. Pero si Bruno ha sido autorizado por Mario a afirmar “estoy caminando”, Bruno estará al mismo tiempo autorizando, *prima facie*, para afirmar que se está moviendo de un

---

20 En el caso de las relaciones inferenciales permisivas, si el hablante está autorizado a D<sub>1</sub>, entonces está *prima facie* autorizado a S<sub>2</sub>, ya que esta última autorización no es inmune a la duda: en el curso del intercambio de razones, el hablante podría resultar no estar comprometido con S<sub>2</sub> y esta autorización sería descartada. Cfr. BRANDOM (1994: 177).

lugar a otro; una autorización que Bruno podría de todos modos cancelar durante la conversación, por ejemplo, diciendo que no se ha comprometido con lo que Mario ha inferido de sus palabras, y que está, en realidad, en el gimnasio caminando sobre una caminadora. El hecho de que Mario haya atribuido a Bruno el compromiso para afirmar “estoy caminando”, excluye, desde el punto de vista de Mario, que Bruno esté autorizado a decir “estoy inmóvil”, porque las dos aserciones son incompatibles entre sí. Nótese que las inferencias recién consideradas identifican el estado normativo de los participantes en una práctica discursiva (Brandom 2008, 120): el deber, la autorización o la prohibición –atribuidos a un participante por los demás mediante su comportamiento lingüístico– de inferir S2 de S1 en un intercambio de razones. De todas maneras, falta precisar cómo dichos estados normativos puedan determinar el contenido lingüístico.

c) La forma en que el contenido lingüístico se determina puede explicarse considerando a cada uno de los participantes de una práctica discursiva como “registradores de puntos” (*scorekeepers*) de los compromisos y autorizaciones de los demás participantes. Como ha mostrado David Lewis, un juego lingüístico puede concebirse como una interacción lingüística en la que los participantes realizan un seguimiento de los puntos anotados, sobre la base de las reglas del juego, por quienes realizan un acto lingüístico mediante el cual son asignados, atribuidos y reconocidos compromisos y autorizaciones<sup>21</sup>. En cada momento del juego la puntuación se determina por el conjunto ordenado de compromisos y autorizaciones asignados a cada participante por los demás. Si se observa desde ese ángulo, el contenido de un enunciado se puede representar como un “marcador” que registra el comportamiento lingüístico de los participantes, los antecedentes y consecuentes de cada enunciación, y las reglas inferenciales que explican el comportamiento de los participantes. De este modo, se puede ofrecer una explicación del contenido lingüístico sobre una base puramente comportamental sin estar forzado a adscribir a los hablantes estados o actitudes intencionales.

Con estas tesis filosóficas es posible desarrollar un modelo analítico original, que sea útil para explicar el contenido lingüístico de una disposición jurídica dentro del contexto judicial. Como ejemplo, imagínese un inter-

---

21 Según LEWIS (1979: 345-346), las reglas que especifican la cinemática de la puntuación “pueden ser consideradas como reglas constitutivas similares a las definiciones”, pero “lo que ellos registran depende del desarrollo de la historia de la conversación, lo que a su vez determina la puntuación conforme a las mismas reglas”.

cambio de razones entre un fiscal acusador A, un abogado defensor D y el juez J en una disputa jurídica. Como Kevin Scharp (2005: 209) ha señalado, “podemos concebir la puntuación en cada momento [de la interacción lingüística] como un conjunto, cuyos miembros son conjuntos de compromisos y autorizaciones”. Dado que A, D y J pueden, mediante sus actos lingüísticos, asumir o reconocer los compromisos y autorizaciones atribuidos a los demás participantes en la controversia, la puntuación registrada por cada participante puede ser representada como un conjunto compuesto por doce subconjuntos: {compromisos reconocidos a A}, {compromisos asumidos por A}, {autorizaciones reconocidas a A}, {autorizaciones asumidas por A}, {compromisos reconocidos a D}, {compromisos asumidos por D}, {autorizaciones reconocidas a D}, {autorizaciones asumidas por D}, {compromisos reconocidos a J}, {compromisos asumidos por J}, {autorizaciones reconocidas a J}, {autorizaciones asumidas por J}<sup>22</sup>. Ahora bien, supongamos que A profiere un enunciado con la forma “*x* es F” (S<sub>1</sub>). Supongamos también que D y J consideran que S<sub>1</sub> tiene fuerza asertiva: ellos atribuirán a A un compromiso doxástico que se anota en el conjunto {compromisos reconocidos a A}. D y J también registrarán los compromisos que se siguen de S<sub>1</sub>, con base en las inferencias que se articulan en el uso de este enunciado en este contexto. Estos compromisos dependen de lo que D y J consideren que A implícitamente afirma profiriendo S<sub>1</sub>, y serán por lo tanto anotados en la casilla {compromisos asumidos por A}. Al hacer esto, D y J también comprueban si los compromisos de A son compatibles entre sí. En caso de que exista alguna incompatibilidad, D y J cancelarán las autorizaciones que provengan de compromisos incompatibles. Dicho de otro modo, si S<sub>1</sub> y S<sub>2</sub> son considerados incompatibles entre sí y A afirma S<sub>1</sub>, entonces no estará autorizado para afirmar S<sub>2</sub> posteriormente. El siguiente paso del proceso de registrar la puntuación consiste en atribuir a A autorizaciones inferenciales. Imaginemos que mediante su comportamiento lingüístico D y J atribuyan a A una autorización para uno de los compromisos reconocidos de A; esto se anotará en la casilla {autorizaciones reconocidas a A}. Seguidamente, D y J identificarán los nuevos compromisos que se siguen de los ya reconocidos, y atribuirán eventuales autorizaciones para aquellos compromisos anotándolos

---

22 Es evidente que algunos de estos sub-conjuntos estarán necesariamente vacíos para cada participante. En la puntuación de J, por ejemplo, ningún punto puede ser asignado a las casillas {autorizaciones reconocidas por J} y a las {autorizaciones suscritas por J}, ya que J no se puede autorizar sus propios compromisos.

en la casilla {autorizaciones asumidas por A}. Por último, D y J determinarán si A está autorizado a afirmar  $S_1$ , es decir, si está discursivamente autorizado a hacerlo. A puede tener autorización para afirmar  $S_1$ , si  $S_1$  se sigue, con base en las inferencias relativas a los compromisos y autorizaciones, de otros compromisos a los que A ya fue autorizado. Esta autorización también se anotará en la casilla {autorizaciones reconocidas a A}. El mismo proceso se llevará a cabo para cada acto de habla realizada por A, D o J.

Sin embargo, hay que resaltar que el rol desempeñado por los tres participantes en la práctica lingüística es asimétrico en el contexto judicial. En los procesos de tipo antagonista, las partes son las que presentan y discuten la cuestión, mientras que el juez desempeña un rol relativamente pasivo. Las partes presentan los hechos del caso y las normas idóneas para regularlo. De esta manera, cada una de las partes articula lingüísticamente intereses y prerrogativas que compiten entre sí, con la finalidad de convencer al juez de reconocer su petición y de rechazar la petición de su oponente. En principio, el juez está obligado simplemente a reconocer o rechazar las peticiones de las partes desde un punto de vista imparcial<sup>23</sup>. Sin embargo, la asignación de puntos por el juez determina autoritativamente el contenido de los enunciados jurídicos, los hechos del caso y, en consecuencia, el resultado de la controversia. En segundo lugar, las autorizaciones reconocidas por el juez J a las partes A y D son de diferentes tipos. Lo que finalmente determina la solución del caso, al momento de tomar la decisión judicial, es la calificación jurídica de los hechos. Dada la norma general  $F \rightarrow O\phi$ , y asumiendo que  $x$  es el caso individual objeto de la controversia, J debe decidir si  $x$  es una instancia de F. Si  $x$  es calificada como F por J, entonces se sigue la norma individual  $x \rightarrow O\phi$ . Por esto, en el proceso judicial de registro de la puntuación es decisivo el punto en el que el juez autoriza a una de las partes a calificar jurídicamente el caso. Este punto determina quién gana la controversia, del mismo modo que el jaque mate determina quién es el ganador en un partido de ajedrez.

---

23 En la práctica, sin embargo, en la mayoría de los sistemas con procedimientos antagonistas, los jueces tienen autoridad para investigar los hechos por iniciativa propia, y para justificar sus decisiones sobre la base de razones no presentadas por las partes. Pero, cuando esto ocurre, las razones de los jueces están estrictamente relacionadas con las posiciones presentadas por las partes. Cfr. LANDSMAN (1983: 715), y HAZARD y TARUFFO (1993: 86).

#### 4. LA INDETERMINACIÓN DE LAS NORMAS: UN ANÁLISIS INFERENCIALISTA

En este punto nos podríamos preguntar: ¿por qué resulta interesante una explicación inferencialista del contenido lingüístico con respecto al problema de la indeterminación de las normas?

Algunos críticos han señalado que la semántica del rol inferencial, y más en general el inferencialismo, no puede explicar la indeterminación de los contenidos lingüísticos porque no puede admitir la existencia de expresiones gobernadas por reglas inferenciales incoherentes (cfr. Gupta, 1999). Sería imposible que los participantes de una práctica lingüística sigan reglas de uso diversas, es decir, que atribuyan roles inferenciales diversos a los mismos enunciados y, al mismo tiempo, que hablen la misma lengua. Una de dos: o bien los participantes hablan lenguas diversas o bien lo que dicen no tiene sentido. En consecuencia, una concepción inferencialista del contenido no podría explicar la indeterminación de las normas. Sin embargo, no creo que esta objeción dé en el blanco. Sobre la base del esquema analítico delineado en la sección precedente, sostendré la siguiente tesis: una norma es indeterminada cuando en un juicio las partes y el juez aplican conjuntos *alternativos* de inferencias con respecto a compromisos o autorizaciones discursivas asumidas y, al mismo tiempo, aplican las *mismas* inferencias de incompatibilidad<sup>24</sup>. Cuando esto sucede, los participantes de la práctica lingüística hablan la misma lengua, pero están en desacuerdo con respecto a algunas de sus reglas de uso, esto es, aquellas reglas que se refieren al predicado (o a los predicados) utilizado para calificar jurídicamente los hechos del caso. Para justificar esta tesis, regresemos al ejemplo presentado por Hart: ¿la disposición “está prohibido circular en el parque con vehículos” expresa una norma que se aplica también a los *skateboards*? Según Hart, este es un caso límite: no está claro si la norma se aplica o no se aplica. Pero ¿cuál es la razón por la que esto sucede?

Imagínese una controversia entre los abogados A y D, frente al juez J, sobre la conducta de Alberto, multado por haber patinado con un *skateboard* en el parque público de su ciudad. Supongamos que A dice:

---

24 Dos conjuntos de relaciones inferenciales entre enunciados son *alternativas* si, y solo si, el uso de un enunciado, siguiendo las reglas identificadas por el primer conjunto, constituye una violación de las reglas identificadas por el segundo conjunto.

(A<sub>I</sub>) Dado que una norma dispone que está prohibido circular en el parque con vehículos, y que Alberto ha circulado en el parque con un *skateboard*, Alberto debe ser sancionado.

Al expresar A<sub>I</sub>, A adopta explícitamente cuatro compromisos discursivos (c) desde el punto de vista de D y J:

(c<sub>1</sub>) Una norma prohíbe circular en el parque con vehículos.

(c<sub>2</sub>) Alberto ha circulado en el parque con su *skateboard*.

(c<sub>3</sub>) Alberto debe ser sancionado.

Nótese que estos compromisos están relacionados, respectivamente, con la fuente de la obligación jurídica (c<sub>1</sub>), los hechos del caso (c<sub>2</sub>) y las consecuencias jurídicas de la conducta (c<sub>3</sub>). Además, expresando A<sub>I</sub>, A adopta un compromiso inferencial ulterior:

(c<sub>4</sub><sup>\*</sup>) Si *x* es un skateboard, entonces *x* es un vehículo.

El compromiso c<sub>4</sub><sup>\*</sup> es particularmente relevante en este contexto: se refiere a la calificación jurídica de los hechos del caso solicitada por A (para otorgar claridad, este compromiso especial será marcado con \*). Si A adquiere de J la autorización para c<sub>4</sub><sup>\*</sup>, entonces A derrotaría a D: J aceptaría las razones de A y resolvería el caso a su favor<sup>25</sup>.

Los compromisos c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>, c<sub>3</sub> y c<sub>4</sub><sup>\*</sup> son registrados por D y J en la casilla {compromisos reconocidos a A} de sus marcadores. Sobre la base de dicho reconocimiento, D y J atribuirán compromisos ulteriores a A, según las relaciones inferenciales que c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>, c<sub>3</sub> y c<sub>4</sub> entretengan con otros enunciados en este contexto de uso del lenguaje. Por ejemplo, podemos suponer que, con base en la competencia lingüística de los participantes, si A se compromete con c<sub>1</sub>, entonces también se habrá comprometido con:

(c<sub>5</sub>) La norma es fuente del derecho en el ordenamiento jurídico en el que J tiene jurisdicción.

Si A se compromete con c<sub>2</sub>, entonces también se habrá comprometido con:

(c<sub>6</sub>) Alberto es un ser humano, y

(c<sub>7</sub>) Alberto estaba ese día en la ciudad.

Si A se compromete con c<sub>3</sub>, entonces se habrá también comprometido con:

---

<sup>25</sup> Esto no significa que los otros compromisos y autorizaciones discursivas no sean relevantes desde el punto de vista de la justificación de la decisión. Cada uno de ellos puede ser discutido por A o por D, y el reconocimiento o la aceptación de las autorizaciones discursivas derivadas de estos compromisos podrían conducir a una solución diferente de la disputa jurídica.



(c8) La aplicación de la norma no admite excepciones implícitas en este caso, y

(c9) La norma no está en conflicto con otras normas del mismo ordenamiento.

Estos compromisos son registrados en el marcador de D y de J, y serán incluidos en la casilla {compromisos asumidos por A}.

Ahora, imagine que D replica A<sub>1</sub> profiriendo el siguiente enunciado:

(D<sub>1</sub>) Es cierto que una norma prohíbe circular en el parque con vehículos, y que Alberto ha circulado en el parque con su *skateboard*, pero dado que los *skateboards* no son vehículos, Alberto no debe ser sancionado.

Realizando el acto de habla D<sub>1</sub>, D reconoce dos autorizaciones discursivas (a) a A:

(a<sub>1</sub>) Una norma prohíbe circular en el parque con vehículos.

(a<sub>2</sub>) Alberto ha circulado en el parque con su *skateboard*.

Estas autorizaciones serán registradas tanto en el marcador de D como en el de J, y serán incluidas en la casilla {autorizaciones reconocidas a A}<sup>26</sup>. Pero, si este es el caso, A estará también autorizado *prima facie* a sostener que:

(a<sub>5</sub>) La norma es una fuente del derecho en el ordenamiento en el cual J tiene jurisdicción.

(a<sub>6</sub>) Alberto es un ser humano.

(a<sub>7</sub>) Alberto estaba ese día en la ciudad.

(a<sub>8</sub>) La aplicación de la norma no admite excepciones implícitas en este caso.

(a<sub>9</sub>) La norma no está en conflicto con otras normas del mismo ordenamiento.

Estas autorizaciones implícitas serán registradas en la casilla {autorizaciones asumidas por A} de acuerdo con las relaciones inferenciales que caracterizan el uso del lenguaje en este contexto<sup>27</sup>. Las autorizaciones (a<sub>3</sub>)...

26 Como consecuencia de D<sub>1</sub>, A y J atribuirán a D los compromisos (c<sub>1</sub>) y (c<sub>2</sub>), los cuales serán asignados a la casilla {compromisos reconocidos a D}. Obsérvese que el hecho de que A esté autorizado por D a (a<sub>1</sub>) y (a<sub>2</sub>) no implica que estas autorizaciones sean reconocidas a A también por J. Sobre la base de razones aún no consideradas, J podría considerar que A, en realidad, no tiene esas autorizaciones. Sin embargo, hemos visto que en un sistema procesal de tipo antagónico los jueces deberían decidir el caso sobre la base de las razones expuestas por las partes. Por esto, es plausible creer que si una de las partes adquiere una autorización para una afirmación determinada, reconocida por la otra parte, esta afirmación será también reconocida por el juez, siempre y cuando no entre en juego en el razonamiento una consideración adicional.

27 Estas autorizaciones corresponden a los compromisos c<sub>5</sub>..., c<sub>9</sub>, registrados en la casilla {compromisos asumidos por D} de los marcadores de A y J.

(a9) son atribuidas *prima facie* a A, porque A no las ha reconocido explícitamente. A podría cancelar dichas autorizaciones, realizando un nuevo paso en el intercambio de razones, negando que realmente esté comprometido con ellas.

Sin embargo, al expresar D<sub>I</sub>, D adopta explícitamente tres compromisos ulteriores, que son incompatibles con (c<sub>3</sub>) y (c<sub>4</sub>\*), y que serán registrados en la casilla {compromisos reconocidos a D} de los marcadores de A y J:

(c<sub>10</sub>\*) Si *x* es una *skateboard*, entonces *x* no es un vehículo.

(c<sub>11</sub>) Alberto no debe ser sancionado.

Téngase en cuenta que D, mediante (c<sub>10</sub>), se compromete con una calificación jurídica de los hechos diferente a la propuesta por A, de la cual se seguiría que Alberto no debe ser sancionado por su conducta. Esto sería así porque (c<sub>10</sub>\*) es incompatible con (c<sub>4</sub>\*): si alguien se compromete con (c<sub>10</sub>\*) no puede estar autorizado a (c<sub>4</sub>\*), y viceversa.

En esta etapa del intercambio de razones, el contenido lingüístico de la disposición puede ser representado como un marcador de puntos, en el cual CR está dado por “compromisos reconocidos”, CA por “compromisos asumidos”, AR por “autorizaciones reconocidas” y AA por “autorizaciones asumidas”:

A:CR	A:CA	A:AR	A:AA	D:CR	D:CA	D:AR	D:AA	J:CR	J:CA	J:AR	J:AA
c <sub>1</sub>		e <sub>1</sub>		c <sub>1</sub>							
c <sub>2</sub>		e <sub>2</sub>		c <sub>2</sub>							
c <sub>3</sub>											
c <sub>4</sub> *											
	c <sub>5</sub>		e <sub>5</sub>			c <sub>5</sub>					
	c <sub>6</sub>		e <sub>6</sub>			c <sub>6</sub>					
	c <sub>7</sub>		e <sub>7</sub>			c <sub>7</sub>					
	c <sub>8</sub>		e <sub>8</sub>			c <sub>8</sub>					
	c <sub>9</sub>		e <sub>9</sub>			c <sub>9</sub>					
						c <sub>10</sub> *					
						c <sub>11</sub>					

A puede proporcionar otras razones, con el propósito de adquirir una autorización para c<sub>4</sub>\*, reconocida por J, y de esta manera ganar el juicio:

(A<sub>2</sub>) Dado que otras normas del ordenamiento evidencian que la *ratio* de esta norma es proteger a los peatones, y que los *skateboards* son una amenaza para los peatones, los *skateboards* son vehículos de acuerdo con el derecho.

Como resultado de A<sub>2</sub>, tres compromisos doxásticos atribuidos a A por D y J serán registrados en la casilla {compromisos reconocidos a A}:



(c12) La *ratio* de la norma es proteger a los peatones.

(c13) La *ratio* de la norma se obtiene de otras normas del ordenamiento.

(c14) Circular con un *skateboard* constituye una amenaza para los peatones.

Se presupone que el enunciado A2 inducirá a D y a J a atribuir a A también algunos compromisos implícitos, que serán registrados en la casilla {compromisos asumidos por A}:

(c15) La disposición tiene que ser interpretada de acuerdo con la *ratio legis* (canon interpretativo teleológico).

(c16) El canon teleológico tiene que ser preferido a otros posibles cánones interpretativos.

(c17) La interpretación judicial está dirigida a garantizar que se logre el propósito de las normas.

Nótese que (c15), (c13), (c16) y (c17) están inferencialmente conectados: (c15) hace explícito el canon interpretativo que se debería aplicar para identificar la norma que regula el caso; (c13) especifica el contenido de ese canon; (c16) identifica el canon interpretativo de segundo orden (canon de preferencia) que justifica el uso del canon teleológico de primer orden<sup>28</sup>; (c17) formula sintéticamente una doctrina normativa de la interpretación que especifica de qué manera J debería concebir y desempeñar su rol institucional cuando interpreta una disposición jurídica.

En este punto de la controversia, D puede replicar A2 de tres maneras diversas:

a) D puede autorizar los compromisos de A (c12), (c13), (c15), (c16), y replicar el compromiso (c14) afirmando, por ejemplo, que los *skateboards* no son peligrosos:

(R2) Dado que circular con un *skateboard* no constituye un peligro para los peatones, los *skateboards* no son vehículos de acuerdo con el derecho.

b) D puede autorizar los compromisos de A (c13), (c15), (c16), (c17), afirmando que la *ratio* de la norma es diferente a la expresada en (c12):

(R3) Dado que el propósito de la norma es reducir la contaminación, y que los *skateboards* no contaminan, las *skateboards* no son vehículos de acuerdo con el derecho.

---

28 Sobre la noción de canon de preferencia, entendido como una directiva interpretativa de segundo nivel, reenvío a CHIASSONI (2007, cap. 2).

c) D puede autorizar los compromisos de A (c15), (c16) y (c17), afirmando que J debería aplicar un canon interpretativo diverso del teleológico:

R4) A la luz de los trabajos preparativos, es evidente que el legislador no tuvo la intención de prohibir la circulación de los *skateboards* en el parque, entonces los *skateboards* no son vehículos de acuerdo con el derecho.

Independientemente de cuál sea concretamente la réplica de D, el análisis desarrollado hasta ahora muestra por qué la disposición “Está prohibido circular con vehículos en el parque” expresa un contenido indeterminado en el contexto examinado. A y D atribuyen a la disposición un rol inferencial parcialmente diverso en el razonamiento, lo que hace que el contenido del predicado utilizado para calificar jurídicamente los hechos sea controvertido. En nuestro ejemplo, el caso es límite si:

a) D profiere D2, impugnando que los *skateboards* tengan la propiedad de ser peligrosos;

b) D profiere D3, impugnando la correcta aplicación del canon interpretativo;

c) D profiere D4, impugnando la elección del canon interpretativo a utilizar.

En resumen, una norma admite casos límite si los participantes institucionales en un intercambio de razones en el contexto de una controversia jurídica están en desacuerdo con respecto a: a) las propiedades relevantes de los hechos, eventos o estados de cosas que la norma regula; b) el contenido del canon aplicado para interpretar la disposición, o c) el canon interpretativo que debe ser aplicado entre aquellos que el juez tiene autorización para utilizar en el contexto de su jurisdicción. Estos desacuerdos son generados por el uso de conjuntos alternativos de relaciones inferenciales entre enunciados por los participantes, relaciones que gobiernan el uso del lenguaje en dicho contexto.

Sin embargo, las partes en el juicio pueden estar de acuerdo solo si comparten un conjunto de asunciones pragmáticas y semánticas de fondo. Más precisamente, puede surgir un desacuerdo entre los hablantes con respecto al contenido de una disposición solamente si ellos utilizan las mismas inferencias de incompatibilidad en la interacción lingüística. En nuestro ejemplo, A y D concuerdan con respecto a la circunstancia de que si uno se compromete con (c4\*) (los *skateboards* son vehículos), no puede estar autorizado a (c10\*) (los *skateboards* no son vehículos); si uno se compromete con (c14) (circular con un *skateboard* constituye un peligro para los peatones),

no puede estar autorizado para sostener que circular con un *skateboard* no constituye un peligro para los peatones; si uno se compromete con (c12) (la *ratio* de la norma es proteger a los peatones), no puede estar autorizados para sostener que la *ratio* de la norma es reducir la contaminación; si uno se compromete con (c16) (el canon teleológico debe ser preferido a otros cánones interpretativos), no puede estar autorizado para sostener que debe ser aplicado el canon de la intención del legislador, y así sucesivamente. En este sentido, las relaciones de incompatibilidad entre enunciados constituyen el fundamento del contenido inferencial de un enunciado<sup>29</sup>.

## 5. EL REGISTRO DE LOS PUNTOS POR PARTE DEL JUEZ

¿Cómo se concluye el intercambio de razones ejemplificado en la sección precedente? El caso será decidido por J, quien evaluará las razones presentadas por las partes y, sobre la base de dichas razones, reducirá la indeterminación de la norma de manera suficiente para calificar jurídicamente los hechos del caso. En la perspectiva inferencialista, la decisión de J estará jurídicamente justificada solo si él “realiza el registro” de los compromisos y autorizaciones adquiridas por A y D durante el intercambio de razones. En particular, J precisará, sobre la base de su marcador de puntos, el contenido de la disposición (la norma expresada por esta) estableciendo si el caso entra dentro de su ámbito de aplicación.

Asumamos, en aras de simplicidad, que D replica A<sub>2</sub> profiriendo D<sub>4</sub>. Imaginemos que, seguidamente a la preferencia de D<sub>4</sub>, A y J atribuyan a D los siguientes compromisos doxásticos, los cuales serán registrados en la casilla {compromisos reconocidos a R}:

(c18) El legislador no tuvo la intención de prohibir la circulación de los *skateboards* en el parque.

(c19) Los trabajos preparatorios muestran que C18 es verdadera.

Sobre la base de las relaciones inferenciales que gobiernan el uso del lenguaje en el contexto examinado, se presupone que A y J atribuyan algunos compromisos implícitos a D, los cuales se registrarán en la casilla {compromisos asumidos por D}.

---

<sup>29</sup> Según BRANDON (2008: 123-126), las inferencias de incompatibilidad pueden ser vistas como “primitivos semánticos”. Sobre este punto cfr. LANCE (2001: 433).

(c20) La disposición tiene que ser interpretada conforme a la intención del legislador.

(c21) La interpretación conforme a la intención del legislador tiene que ser preferida con respecto a otros cánones interpretativos.

(c22) La interpretación judicial tiene como objetivo identificar y realizar la intención del legislador.

En este intercambio de razones es evidente que (c20), (c21) y (c22) son incompatibles, respectivamente, con (c15), (c16) y (c17). Si alguna de las partes se compromete con las tres primeras afirmaciones, entonces no puede estar autorizada a sostener las segundas tres, y viceversa. En realidad, D propone a J, mediante D<sub>4</sub>, utilizar un canon interpretativo diverso, basado sobre una diversa teoría normativa de la interpretación.

En esta segunda etapa del intercambio de razones entre las partes, la puntuación registrada en el marcador de J, que identifica el contenido de la disposición en esta fase del debate, evoluciona de la siguiente manera:

A:CR	A:CA	A:AR	A:AA	D:CR	D:CA	D:AR	D:AA	J:CR	J:CA	J:AR	J:AA
c1		e1		c1		e1					
c2		e2		c2		e2					
c3											
c4*											
	c5		e5		c5		e5				
	c6		e6		c6		e6				
	c7		e7		c7		e7				
	c8		e8		c8		e8				
	c9		e9		c9		e9				
				c10*							
				c11							
c12											
c13											
c14											
	c15										
	c16										
	c17										
				c18							
				c19							
					c20						
					c21						
					c22						

Ahora, imaginemos que J resuelva la controversia del siguiente modo:

(J<sub>1</sub>) Dado que Alberto ha circulado en el parque con un *skateboard*, que una norma prohíbe circular con vehículos en el parque, que la *ratio* de la norma consiste en proteger a los peatones, y que circular con un *skateboard* constituye un peligro para los peatones, se sigue que los *skateboards* son vehículos de acuerdo con el derecho; por lo tanto, Alberto ha violado la norma y debe ser sancionado.

Por un lado, J reconoce a A y a D, mediante J<sub>1</sub>, las siguientes autorizaciones, que corresponden a los compromisos atribuidos a J por las partes:

(a<sub>1</sub>) Una norma prohíbe circular con vehículos en el parque.

(a<sub>2</sub>) Alberto ha circulado en el parque con un *skateboard*.

Por el otro lado, J también atribuye implícitamente un conjunto de autorizaciones a A y a D:

(a<sub>5</sub>) La norma es fuente del derecho en el ordenamiento en el que J tiene jurisdicción.

(a<sub>6</sub>) Alberto es un ser humano.

(a<sub>7</sub>) Alberto estaba ese día en la ciudad.

(a<sub>8</sub>) La aplicación de la norma no admite excepciones implícitas en este caso.

(a<sub>9</sub>) La norma no está en conflicto con otras normas del ordenamiento.

A través del mismo acto de habla, J reconoce las siguientes autorizaciones a A, registradas en la casilla {autorizaciones reconocidas a A} de su marcador:

(a<sub>15</sub>) La disposición tiene que ser interpretada conforme a la *ratio legis* (canon teleológico).

(a<sub>12</sub>) La *ratio* de la norma consiste en proteger a los peatones.

(e<sub>14</sub>) Circular con un *skateboard* constituye una amenaza para los peatones.

J también asume implícitamente un conjunto de autorizaciones registradas en {autorizaciones asumidas por A}:

(e<sub>16</sub>) El canon teleológico tiene que ser preferido con respecto a otros métodos interpretativos.

(a<sub>17</sub>) La interpretación judicial está dirigida a garantizar que se logre el propósito de las normas.

El movimiento inferencial más importante en el razonamiento de J está relacionado con la calificación jurídica de los hechos<sup>30</sup>. J atribuye, mediante

---

30 Vale la pena señalar que la controversia jurídica entre A y D podría focalizarse sobre otra cuestión, como la determinación de los hechos, los requisitos procesales o la determinación de la sanción. Esto cambiaría la forma en que los puntos asignados en el marcador de J evolucionan en el tiempo sobre la base de las razones ofrecidas por A y D.

J<sub>1</sub>, una autorización clave a A en el intercambio de razones, registrada en la casilla {autorizaciones reconocidas a A}:

(a<sub>4</sub><sup>\*</sup>) Si *x* es un *skateboard*, entonces *x* es un vehículo de acuerdo con el derecho.

De esta manera, si (a<sub>4</sub><sup>\*</sup>) es reconocido por el juez, entonces A adquiere la autorización de J para sostener que:

(a<sub>3</sub>) Alberto debe ser sancionado.

En el cálculo de los puntos marcados por A y D durante el intercambio de razones, A tuvo resultados mejores desde el punto de vista de J, y ganó el juicio. Al mismo tiempo, el registro de puntos de J precisó el contenido de la disposición, reconociendo la calificación jurídica de los hechos propuesta por A y rechazando la calificación propuesta por D. Obviamente, las razones expresadas por D no son canceladas: la indeterminación de la norma se reduce autoritativamente en la medida suficiente como para resolver el caso.

Al final de la controversia, el marcador de puntos de J registra la siguiente puntuación:

A:CR	A:CA	A:AR	A:AR	D:CR	D:CA	D:AR	D:AA	J:CR	J:CA	J:AR	J:AA
c <sub>1</sub>		e <sub>1</sub>		c <sub>1</sub>		e <sub>1</sub>		c <sub>1</sub>			
c <sub>2</sub>		e <sub>2</sub>		c <sub>2</sub>		e <sub>2</sub>		c <sub>2</sub>			
c <sub>3</sub>		e <sub>3</sub>						c <sub>3</sub>			
c <sub>4</sub> <sup>*</sup>		e <sub>4</sub> <sup>*</sup>						c <sub>4</sub> <sup>*</sup>			
	c <sub>5</sub>		e <sub>5</sub>		c <sub>5</sub>		e <sub>5</sub>		c <sub>5</sub>		
	c <sub>6</sub>		e <sub>6</sub>		c <sub>6</sub>		e <sub>6</sub>		c <sub>6</sub>		
	c <sub>7</sub>		e <sub>7</sub>		c <sub>7</sub>		e <sub>7</sub>		c <sub>7</sub>		
	c <sub>8</sub>		e <sub>8</sub>		c <sub>8</sub>		e <sub>8</sub>		c <sub>8</sub>		
	c <sub>9</sub>		e <sub>9</sub>		c <sub>9</sub>		e <sub>9</sub>		c <sub>9</sub>		
				c <sub>10</sub> <sup>*</sup>							
				c <sub>11</sub>							
c <sub>12</sub>		e <sub>12</sub>						c <sub>12</sub>			
c <sub>13</sub>											
c <sub>14</sub>		e <sub>14</sub>						c <sub>14</sub>			
	c <sub>15</sub>	e <sub>15</sub>							c <sub>15</sub>		
	c <sub>16</sub>		e <sub>16</sub>						c <sub>16</sub>		
	c <sub>17</sub>		e <sub>17</sub>						c <sub>17</sub>		
				c <sub>18</sub>							
				c <sub>19</sub>							
					c <sub>20</sub>						
					c <sub>21</sub>						
					c <sub>22</sub>						

El marcador de J muestra por qué la norma, debido al comportamiento lingüístico de las partes y del juez, se encontraba indeterminada durante el intercambio de razones y cómo dicha indeterminación fue reducida por J para decidir la controversia. Hay que enfatizar que las razones que justifican la decisión de J podrían reexaminarse, si así lo prevé el ordenamiento, en una instancia judicial superior; una eventual reexaminación del caso podría cambiar el puntaje registrado por J a lo largo del intercambio de razones y, de esta manera, también el contenido de la disposición. Por ejemplo, D podría impugnar la decisión replicando (a3), (a4) y (a5) —o sosteniendo, frente a una nueva corte, que J no tenía autorización para los compromisos discursivos asumidos en la motivación de la sentencia. Si la corte de apelaciones no reconoce autorización para (c4\*), ni para otros compromisos a él atribuidos durante el nuevo intercambio de razones, la decisión de J sería reformulada. Estos nuevos puntos serían registrados en la casilla {autorizaciones reconocidas a J} y {autorizaciones asumidas por J} del marcador de la corte de apelación.

## 6. OBSERVACIONES FINALES

Ahora podemos volver al problema inicial presentado en este artículo: ¿en qué consiste la indeterminación de las normas? De acuerdo con un enfoque inferencialista, la indeterminación de las normas es un fenómeno que depende del comportamiento lingüístico de los participantes en un intercambio de razones. Con respecto al contexto judicial, en el cual las normas se utilizan para calificar jurídicamente los hechos del caso, una norma es indeterminada cuando las partes y el juez están en desacuerdo acerca del contenido (rol inferencial) de la disposición, y este desacuerdo lleva a considerar que el caso examinado es límite. En consecuencia, la práctica de dar y pedir razones es tanto la fuente de indeterminación de las normas, como el instrumento para reducir la indeterminación con fines decisionales. Más precisamente, un caso es límite si, para calificar jurídicamente los hechos del caso, a) los participantes de la práctica lingüística usan el mismo enunciado normativo sobre la base de diversos conjuntos de inferencias relativas a los compromisos y autorizaciones de los hablantes, y b) si los participantes de la práctica lingüística aplican las mismas inferencias de incompatibilidad en el discurso, lo que hace posible el desacuerdo.



El análisis propuesto en este artículo nos lleva a una consideración adicional. Un enfoque inferencialista no describe la comunicación lingüística en el ámbito jurídico como una transmisión simple, por el legislador, de directivas de acción, mediante el auxilio de un código lingüístico. El contenido no es una entidad mental comunicada a otras mentes; este consiste, más bien, en un conjunto de relaciones inferenciales en las cuales un portador de contenido (típicamente un enunciado normativo) desempeña el rol de premisa o de conclusión. Estas relaciones dependen del estado normativo que los ejecutantes de la práctica lingüística se atribuyen recíprocamente, y evolucionan con el transcurso del tiempo, con base en las reglas que gobiernan el uso del lenguaje, reflejando el comportamiento lingüístico de los participantes en la práctica<sup>31</sup>. Esta perspectiva da cuenta de la dimensión institucional en el campo del derecho y muestra que, en el contexto judicial, la intención del legislador, de cualquier modo que sea concebida, no constituye un instrumento privilegiado para resolver el problema de la indeterminación de las normas, como sugiere el modelo conversacional. La intención del legislador constituye una fuente de indeterminación de las normas, y se trata como una razón subordinada en la determinación de los contenidos normativos.

De todos modos, el modelo inferencialista desarrollado en este artículo no es inmune a críticas. En primer lugar, uno podría preguntarse si es realmente deseable o apropiado rechazar el modelo conversacional con respecto al estudio del lenguaje jurídico. Según algunos, el enfoque estándar en semántica y en pragmática tiene los recursos necesarios para dar cuenta de la peculiaridad de este tipo de lenguaje: los contextos institucionales en los que la comunicación tiene lugar, las específicas características de la intención del legislador, y el carácter autoritativo de las normas pueden ser explicados en términos de presuposiciones e implicaturas conversacionales que enriquecen, modulan o extienden el significado codificado en los textos normativos. Entonces, ¿por qué deberíamos invertir los axiomas fundamentales de la perspectiva tradicional explicando la semántica en función de la pragmática y concibiendo los aspectos intenciones de la comunicación en términos del comportamiento lingüístico de los hablantes? Una respuesta posible consiste en que enfoques diferentes de la semántica y de la pragmá-

---

31 Según BRANDON (1994: 474), “decir que una información [...] es comunicada significa que los compromisos asumidos por un interlocutor se hacen disponibles para otros (quienes las atribuyen) como premisa para otras inferencias. La comunicación consiste en la producción y el consumo social de razones”.



tica capturan aspectos diferentes del lenguaje y de la comunicación; por lo tanto, cada enfoque es más o menos interesante y convincente en función del dominio lingüístico examinado y del propósito de la investigación filosófica. La estrategia inferencialista tiene la ventaja de focalizar su atención en algunos aspectos de la comunicación que son de suma importancia en el derecho, mientras que el modelo conversacional tiende a pasarlos por alto, o considerarlos como periféricos con respecto a otros fenómenos. Parafraseando a Kelsen, el modelo propuesto lleva a concebir el contenido lingüístico en términos nomodinámicos, es decir, como una función de los estados normativos de los hablantes que depende de actos de autorización<sup>32</sup>.

En segundo lugar, hemos visto que de acuerdo con la perspectiva inferencialista, la indeterminación de las normas se configura como una forma específica de desacuerdo entre los participantes en un intercambio de razones. Sin embargo, en el intercambio lingüístico ordinario el desacuerdo entre A y D acerca del contenido de una expresión lingüística no lleva a la conclusión de que el contenido de la expresión sea indeterminado. Supongamos que A y D desacuerden acerca del contenido del predicado “vehículo”: A afirma que los canguros cuentan como vehículos, mientras que D afirma que los canguros no cuentan como vehículos. ¿Esta sería una buena razón para pensar que el predicado “vehículo” se encuentra indeterminado? Por supuesto que no. Lo que hace la diferencia es, más bien, la circunstancia de que haya un desacuerdo suficiente, generalizado al interior de la comunidad lingüística, con respecto a las características que distinguen a los miembros de una clase, en este caso, la clase designada por el término “vehículo”. Una posible respuesta a esta objeción es la siguiente: la indeterminación de los contenidos lingüísticos no depende del estado de nuestros conocimientos sobre el mundo, sino que surge cuando un juego lingüístico se atasca porque de pronto se cuestiona alguna de sus reglas. Por eso los *skateboards* pueden constituir casos límite de vehículos, independientes de las propiedades que caractericen a los *skateboards* y de nuestras creencias acerca de ellos. Más difícil es establecer qué tan generalizado debe ser un desacuerdo lingüístico para generar indeterminación semántica. ¿Para que esto suceda es suficiente con que A y D desacuerden? Cabe señalar que las inferencias que articulan

---

32 Se podría sostener que este artículo aplica a la comunicación lingüística el “principio nomodinámico”, que según KELSEN (1966: 219 y ss.) caracteriza a los sistemas jurídicos, en un contexto institucional.

el contenido lingüístico capturan algunas asunciones de fondo compartidas por una comunidad, las cuales forman parte de las competencias lingüísticas de los hablantes: el intercambio de razones entre A y D hace simplemente explícito un subconjunto de estas asunciones compartidas: aquellas consideradas relevantes, para propósitos prácticos, en el contexto considerado. Sobre la base de estas asunciones, por ejemplo, resulta razonable tratar a los *skateboards* como casos límite de vehículos y considerar a los canguros, en cambio, como entidades que no pertenecen claramente a la clase de los vehículos, aunque en diferentes contextos nuestras opiniones claramente podrían cambiar. Sin embargo, no está claro cómo el inferencialismo puede distinguir entre las asunciones de una comunidad lingüística y las asunciones idiosincráticas de los participantes en un intercambio de razones, más allá de la posibilidad de hacerlo en términos estadísticos. Con respecto a esto, la perspectiva inferencialista necesita ser aún desarrollada.

En tercer lugar, una explicación inferencialista de la indeterminación de las normas se enfrenta a la amenaza de la indeterminación de orden superior. Hemos visto que el contenido lingüístico es indeterminado cuando los participantes en un intercambio de razones atribuyen compromisos y autorizaciones discursivas sobre la base de inferencias diversas, y además usan las mismas inferencias de incompatibilidad en sus razonamientos. Pero ¿qué sucede en la situación en que las incompatibilidades entre enunciaciones están indeterminadas, es decir, la situación en la que los participantes desacuerdan acerca de si uno está comprometido con  $S_1$ , entonces no puede estar autorizado a  $S_2$ ? Para resolver este problema, el enfoque inferencialista debería especificar qué tipos de desacuerdo de orden superior son admisibles en un intercambio de razones.

En conclusión, el modelo inferencialista propuesto en este artículo ofrece una explicación original de la indeterminación de las normas, una explicación que pone de relieve ciertas características del lenguaje jurídico que generalmente quedan opacadas por el modelo conversacional. De todos modos, este modelo no es inmune a objeciones y, por lo tanto, requiere una mayor precisión y desarrollo.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALLAN, J. "Constitutional Interpretation v. Statutory Interpretation. Understanding the Attractions of 'Original Intent'", *Legal Theory*, 6.

- BACHARACH, M. *Beyond Individual Choice*, Princeton, Princeton University Press, 2006.
- BOUDREAU, C.; A. LUPIA, M. D. McCUBBINS y D. B. Rodriguez. “What Statutes Mean: Interpretive Lessons from Positive Theories of Communication and Legislation”, *San Diego Law Review*, 44, 2007.
- BRANDON, R. B. *Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment*, Harvard (Mass.) y London, Harvard University Press, 1994.
- BRANDON, R. B. *Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism*, Cambridge (Mass.) y London, Harvard University Press, 2000.
- BRANDON, R. B. *Between Saying and Doing. Towards an Analytic Pragmatism*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- BRATMAN, M. E. *Faces of Intention. Selected Essay on Intention and Agency*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- BUENO, O. y M. COLYVAN. “Just What Is Vagueness?”, *Ratio*, 25, 2012.
- CAMPBELL, T. “Legislative Intent and Democratic Decision Making”, en N. NAFFINE, R. J. OWENS y J. WILLIAMS (eds.). *Intention in Law and Philosophy*, Ashgate, Aldershot, 2001.
- CANALE, D. y G. TUZET. “On Legal Inferentialism. Towards a Pragmatics of Semantic Content in Legal Adjudication?”, *Ratio Juris*, 20, 2007.
- CANALE, D. y G. TUZET. “What the Legislature Did Not Say. Legislative Intentions and Counterfactuals in Legal Argumentation”, *Journal of Argumentation in Context*, 5, 2016, 249-270.
- CHIASSONI, P. *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- EKINS, R. *The Nature of Legislative Intent*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- ENDICOTT, T. “The Value of Vagueness”, en A. MARMOR y S. SOAMES (eds.). *Philosophical Foundations of Language in the Law* (14.30), Oxford, Oxford University Press, 2011.
- ESKRIDGE, W. N. “Dynamic Statutory Interpretation”, *University of Pennsylvania Law Review*, 135, 1987.
- GARDNER, J. “Ethics and Law”, en J. SKORUPSKI (ed.). *The Routledge Companion to Ethics* (420-430), London, Routledge, 2010.

- GILBERT, M. *A Theory of Political Obligation. Membership, Commitment, and the Bonds of Society*, Oxford, Oxford University Press, 2006.
- GUASTINI, R. *Discutendo*, Madrid, Marcial Pons, 2017.
- GOLDSWORTHY, J. “Originalism in Constitutional Interpretation”, *Federal Law Review*, 25, 1997.
- GOLDSWORTHY, J. “Legislative Intentions, Legislative Supremacy, and Legal Positivism”, *San Diego Law Review*, 42, 2005.
- GREENBERG, M. “Legislation as Communication? Legal Interpretation and the Study of Linguistic Communication”, en A. MARMOR y S. SOAMES (eds.). *Philosophical Foundations of Language in the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- GRICE, H. P. *Studies in the Way of Words*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1989.
- GUPTA, A. “Meaning and Misconceptions”, en R. JACKENDOFF, P. BLOOM y K. WYNN (eds.). *Language, Logic, and Concepts*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1999.
- HART, H. L. A. “Positivism and the Separation of Law and Morals”, en H. L. A. HART. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon Press, 1983.
- HART, H. L. A. *The Concept of Law*, 2.<sup>a</sup> ed., Oxford, Clarendon Press, 1994.
- HAZARD, G. C. y M. TARUFFO. *American Civil Procedure*, New Haven, Yale University Press, 1993.
- KELSEN, H. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966.
- LANCE, M. “The Logical Structure of Linguistic Commitment III: Brandomian Scorekeeping and Incompatibility”, *Journal of Philosophical Logic*, 30, 2001.
- LANDSMAN, S. “A BRIEF SURVEY OF THE DEVELOPMENT OF THE ADVERSARY SYSTEM”, *Ohio State Law Journal*, 44, 1983.
- LEWIS, D. “Scorekeeping in a Language Game”, *Journal of Philosophical Logic*, 8, 1979.
- LUZZATI, C. *La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè, 1990.
- MACCORMICK, N. *Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

- MACPHERSON, J. A. E. "Legislative Intentionalism and Proxy Agency", *Law and Philosophy*, 29, 2010.
- MANNING, J. F. "Textualism and the Equity of the Statute", *Columbia Law Review*, 101, 2001.
- MARMOR, A. *Interpretation and Legal Theory*, 2.<sup>a</sup> ed., Oxford-Portland, Hart Publishing, 2005.
- MARMOR, A. "The Pragmatics of Legal Language", *Ratio Juris*, 21, 2008.
- MORESO, J. J. *Lógica, argumentación e interpretación en el derecho*, Barcelona, Editorial UOC, 2005.
- NEALE, S. "On Location", en M. O'ROURKE y C. WASHINGTON (eds.). *Situating Semantics. Essays on the Philosophy of John Perry*, Cambridge (Mass.) London, MIT Press, 2007.
- PETTIT, P. "Collective Intentions", en N. NAFFINE, R. J. OWENS y J. WILLIAMS (eds.), *Intention in Law and Philosophy*, Ashgate, Aldershot, 2001.
- POSCHER, R. "Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation", L. SOLAN y P. TIERSMA (eds.). *Oxford Handbook on Language and Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- RADIN, M. "Statutory Interpretation", *Harvard Law Review*, 43, 1930.
- RAZ, J. *Between Authority and Interpretation. On the Theory of Law and Practical Reason*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- RECANATI, F. "Does Linguistic Communication Rest on Inference?", *Mind & Language*, 17, 2002.
- SAUL, J. "Speaker Meaning, What is Said, and What is Implicated", *Nous*, 36, 2002.
- SBISÀ, M. *Detto, non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- SCHARP, K. "Scorekeeping in a Defective Language Game", *Pragmatics and Cognition*, 13, 2005.
- SCHAUER, F. "A Critical Guide to Vehicles in the Park", *New York University Law Review*, 83, 2008.

SELLARS, W. "Inference and Meaning", *Mind*, 62, 1953.

SOAMES, S. "Interpreting Legal Texts: What is, and What is Not, Special about the Law", en S. SOAMES. *Philosophical Essays*, vol. I, *Natural Language: What It Means and How We Use It*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2009.

SOAMES, S. "Vagueness and the Law", en A. MARMOR (ed.). *The Routledge Companion to Philosophy of Law*, New York, Routledge, 2012.

SPERBER, D. y D. WILSON. *Relevance: Communication and Cognition*, 2.<sup>a</sup> ed., Oxford, Blackwell, 1995.

STOLJAR, N. "Counterfactuals in Interpretation: The Case Against Intentionalism", *Adelaide Law Review*, 20, 1998.

SUMMERS, R. S. *Essays in Legal Theory*, Dordrecht, Kluwer, 2000.

TOUMELA, R. *Social Ontology. Collective Intentionality and Group Agents*, Oxford University Press, 2013.

WILLIAMS, J. "Constitutional Intention: The Limits of Originalism", en N. R. J. NAFFINE y J. WILLIAMS OWENS (eds.). *Intention in Law and Philosophy*, Aldershot, Ashgate, 2001.